

PARIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA POLÍTICA “ABIERTA” CONTRA LAS MUJERES

Adriana Báez Carlos y Mireya Santillán Cárdenas

(*Avances de ponencia in extenso)

La reforma político-electoral 2014 dispuso la paridad de género en las candidaturas a los legislativos federal y estatales. Al replicar la disposición en sus constituciones locales, las entidades federativas del país ampliaron la disposición a las candidaturas a todos los cargos municipales. En este nivel, movimientos feministas lograron que la paridad a las candidaturas se aplicara lo mismo de manera vertical que horizontal, impactando de manera contundente en la postulación a cargos de elección popular y en la integración de legislativos, presidencias municipales y cabildos.

La irrupción “obligatoria” de mujeres a la arena política despertó las reacciones más abiertas en su contra conocidas hasta ese momento en México: Amenazas causantes de daños emocionales y ataques físicos comenzaron a ser denunciados por mujeres aspirantes a candidaturas, candidatas, consejeras, magistradas y funcionarias públicas, dando pie al reconocimiento institucional de un fenómeno hasta entonces no visibilizado: la violencia política contra las mujeres.

El presente trabajo revisa el contenido de la reforma político-electoral 2014; su impacto en la integración de los congresos y las presidencias municipales de todas las entidades federativas del país, se propone encontrar una explicación política a la diferenciación regional en el grado de avance de la representación política de las mujeres e inicia una tipificación de la violencia política.

Se parte de la hipótesis de que la irrupción obligatoria de las mujeres en la política, que impulsó de manera contundente la reforma político-electoral 2014, desató e hizo visible el fenómeno de la violencia política contra las mujeres, expresado en reacciones desesperadas de varones que ven amenazados sus privilegios, en un

comportamiento que se manifiesta con mayor intensidad a nivel municipal y en las entidades federativas con menores grado de desarrollo..

El fortalecimiento de la política de acción afirmativa en favor de las mujeres

La reforma político-electoral 2014 incluyó un afinado rediseño en la política de acción afirmativa en favor de las mujeres, que puso en marcha México en 2002 (aunque delineó desde 1993), con la finalidad de asegurar la *efectividad* del derecho de las mujeres a ser votadas.

En un claro reconocimiento a que los detalles del diseño institucional importan para hacer efectivas las metas planteadas, el nuevo modelo rescató y fortaleció varios candados incorporados al mecanismo en años previos, e incluyó dispositivos para asegurar que las candidaturas de mujeres al Poder Legislativo dejaran de ser *simbólicas*:

EXIGENCIAS DE PARIDAD EN CANDIDATURAS LEGISLATIVAS. REFORMA 2014

- 1. Aumentó a la paridad la cuota de género*
- 2. Elevó a rango constitucional la cuota de género*
- 3. Se amplía su aplicación a las candidaturas a todos los congresos del país*
- 4. Obliga a integrar las fórmulas de candidatos con un mismo género*
- 5. Obliga a alternar el género en las listas de candidatos por representación proporcional*
- 6. Deja a los partidos en “libertad” de definir los criterios con los cuales garantizarán la exigencia de paridad de sus candidaturas (eliminado las excepciones expresas a la cuota)*
7. Prohíbe a los partidos políticos definir con un sesgo de género las candidaturas de los distritos en los que registraron los menores porcentajes de votación en el proceso electoral anterior

La reforma elevó a la paridad, es decir al 50 por ciento, la “cuota de género”, en las candidaturas legislativas, ubicando a México entre los países que imponen la proporción más elevada en este mecanismo (Cepal: 2007, Ríos Tobar: 2008).

Antecedentes

México optó por las cuotas de género en las candidaturas al Congreso de la Unión como política de acción afirmativa para impulsar una cultura de equidad, no discriminatoria de género, luego de suscribir la Convención Internacional de los Derechos Políticos de la Mujer (1952), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y los acuerdos de las conferencias mundiales de El Cairo (1994) y Beijing (1995) (Peschard: 2003).

En su primera versión, en 1993, el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales dispuso que los partidos políticos *debían promover*, en los términos que determinaran sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular (Peschard: 2003, Aparicio: 2011).

La norma se adecuó en 1996 para señalar que los partidos políticos nacionales *debían considerar en sus estatutos* que las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado de la República no excedieran del 70 por ciento para un mismo género.

La política de acción afirmativa se ajustó en 2002 para señalar que los partidos estaban *obligados* a cubrir la cuota de género en sus candidaturas al Congreso de la Unión, y en 2008 la cuota mínima de género en las candidaturas legislativas se elevó a 40 por ciento.

La reforma político-electoral 2014 subió a rango constitucional la obligación de los partidos políticos de garantizar la cuota de género, ahora paritaria, en las candidaturas al Congreso de la Unión y amplió la exigencia de su aplicación a las candidaturas a todos los congresos locales del país.

A partir de febrero de 2014, el artículo 41 de la Constitución señala que los partidos políticos deben “garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales”.

El ajuste se dio en el marco de un rediseño del sistema de gobierno, que optó por una mayor centralización en todo lo relativo a la gestión de las instituciones democráticas de México, tras un diagnóstico que encontró que el desarrollo democrático en las distintas entidades de la República mostraba diferentes niveles de reconocimiento y respeto a los derechos y obligaciones políticas de los ciudadanos, fenómeno al cual no escapó la aplicación y los efectos de las cuotas de género en el interior del país. (Reynoso y D’Angelo: 2006)

En materia de género, la reforma recuperó mecanismos adoptados en ajustes electorales previos, y otros introducidos por sentencias del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al tiempo que incorporó nuevos para fortalecer las medidas tendientes a garantizar la efectividad de las candidaturas de las mujeres a los legislativos.

La nueva disposición señala que las candidaturas deben integrarse con fórmulas (propietario y suplente) de un mismo género (Art. 232 Lgipe) y el género de los candidatos que integran las listas por representación proporcional debe alternarse, por primera vez, desde el principio hasta el final (Art. 234 Lgipe).

Para garantizar que los partidos políticos cubran la cuota sin exceptuar los procesos de competencia partidista interna, a partir de 2014 están obligados a hacer públicos los criterios que utilizarán para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales (Art.3 Lgp) y tienen prohibido definir con un sesgo de género las candidaturas de los distritos en los que registraron los menores porcentajes de votación en el proceso electoral anterior (Art 3 Lgp).

Los candados responden a las omisiones legislativas previas y a las prácticas políticas utilizadas por los partidos para restar efectividad al mecanismo de acción afirmativa e impedir que las mujeres lleguen a los Congresos.

Anteriormente, los liderazgos partidistas solían cumplir la norma colocando a las candidaturas de mujeres en las *suplencias* de sus fórmulas contendientes o en los *últimos lugares* de las listas de representación proporcional (Aparicio: 2011). Cuando en 2002, se ajustó la política de acción afirmativa para *obligar* a los partidos a cubrir la cuota de género en sus candidaturas al Congreso de la Unión e integrar las listas de representación proporcional por segmentos de tres candidaturas, con una postulación de género distinto en cada uno de los tres primeros, del mecanismo se exceptuaban las candidaturas de mayoría relativa resultado de un proceso de elección mediante voto directo.

Y luego de que en 2008 la cuota mínima de género en las candidaturas al Congreso de la Unión se elevó a 40 por ciento, manteniéndose la excepción para el caso de las candidaturas resultado de elecciones democráticas internas y estableciendo que las listas de representación proporcional se integrarían por segmentos de cinco candidaturas, en cada uno de los cuales debían colocarse alternadamente dos candidatos de género distinto (Aparicio: 2011), en las elecciones legislativas de 2009, los partidos políticos postularon a mujeres en el 40 por ciento de las candidaturas que definieron por métodos distintos a una elección interna, pero sólo 141 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados, 28.2 por ciento, fueron ganados por ellas, y poco después del inicio de la LX Legislatura, varias de las recién nombradas diputadas federales solicitaron licencia para dejar su lugar a un suplente varón.

En reacción, y como respuesta a diversas demandas interpuestas por mujeres afectadas, para los comicios federales 2012 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió obligar a los partidos políticos a integrar con personas de un mismo género al menos 40 por ciento de sus fórmulas de candidatos

(*propietario-suplente*) por mayoría relativa al Congreso de la Unión y eliminó la excepción a la aplicación de la cuota de género, al señalar que todos los métodos de selección de candidatos que se contemplan en los estatutos de los partidos políticos en nuestro país son democráticos.

La medida permitió que, por primera vez, 40 por ciento de las fórmulas de candidatos al Congreso por mayoría relativa de todos los partidos políticos fueran ocupadas por mujeres, lo mismo que cerca del 50 por ciento de las incluidas en las listas de representación proporcional, dando por resultado que 37.4 por ciento de las diputaciones y 32.8 por ciento de las senadurías fueron ganadas por mujeres.

La paridad en candidaturas legislativas federales de 2015

La reforma político-electoral 2014 se puso a prueba en los procesos electorales de 2015, 2016 y 2017, que renovaron el total de las legislaturas y presidencias municipales del país.

El 7 de junio de 2015 se registraron elecciones concurrentes para la renovación de gobernadores en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; la integración de las legislaturas 2015-2018 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (300 diputados de Mayoría Relativa y 200 de Representación Proporcional) y los congresos locales de los estados de Baja California (16 MR y 5 RP), Campeche (21 MR y 14 RP), Colima (16 MR y 9 RP), Distrito Federal (40 MR y 26 RP), Guanajuato (22 MR y 14 RP), Guerrero (28 MR y 18 RP), Jalisco (20 MR y 19 RP), México (45 MR y 30 RP), Michoacán (24 MR y 16 RP), Morelos (18 MR y 12 RP), Nuevo León (26 MR y 16 RP), Querétaro (15 MR y 10 RP), San Luis Potosí (15 MR y 12 RP), Sonora (21 MR y 12 RP), Tabasco (21 MR y 14 RP) y Yucatán (15 MR y 10 RP); a los que se sumó Chiapas, con comicios el 19 de julio que renovaron su Congreso (24 MR y 17 RP

*uno por RP especial para migrantes) y en conjunto se definieron un total de mil nueve gobiernos municipales.

En 2016 los estados de Aguascalientes, Baja Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas tuvieron procesos electorales para renovar a sus gobernadores; y todas estas entidades, con excepción de Puebla, renovaron además sus legislaturas y, con excepción de Veracruz, también a sus presidencias municipales, y a los diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; para una renovación total de 239 diputados estatales de mayoría relativa, 209 de representación proporcional y 967 ayuntamientos.

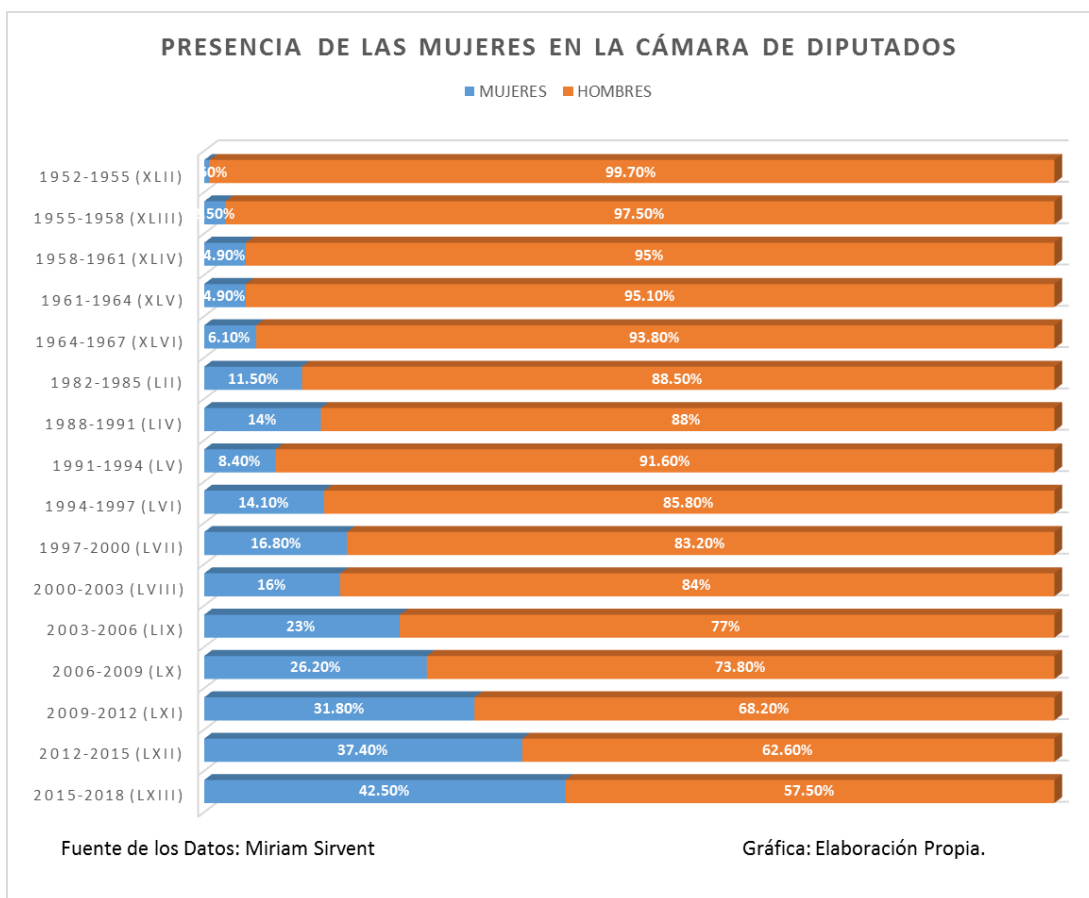
La aplicación de las disposiciones de la reforma político-electoral 2014 en las entidades federativas culminó este año con las elecciones de gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit; así como las legislaturas de Coahuila (16MR, 9 RP) y Nayarit (18 MR, 12 RP).

Distribución de género en LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

Como era de esperarse, el renovado mecanismo de acción afirmativa arrojó la representación de mujeres más alta registrada en la Cámara de Diputados hasta ese momento, del 44 %, pero sin lograr la paridad.

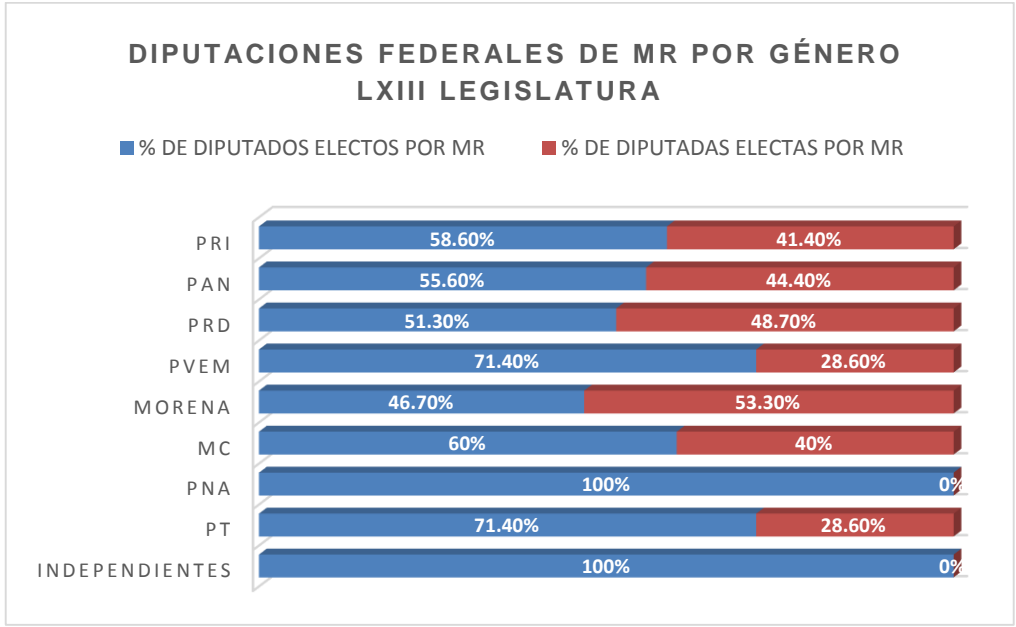
La representación de mujeres no llegó a la paridad por varias razones: Primero, los asientos legislativos se ganan con votos, no basta ser candidato, aunque sin candidaturas las opciones son nulas; segundo, pese a que las nuevas reglas exigen la paridad en las candidaturas, fue notorio que los candidatos hombres de los partidos políticos fueron postulados mayormente en los distritos uninominales que sus agrupaciones habían ganado en la elección anterior; en tanto que la mayoría de los distritos perdidos en los comicios previos se distribuyeron entre

mujeres; tercero, si bien se alternó el género en las listas de candidatos por representación proporcional, la mayoría de los partidos abrieron sus listados con varones en las cinco circunscripciones plurinominales (PVEM y MC, que lo hicieron con mujeres en la cuarta y la tercera circunscripción, de manera respectiva; NA que inició con mujeres la segunda y la quinta, y Morena que abrió con mujeres la quinta circunscripción, fueron la excepción). El acomodo permitió que los partidos que lograron un reparto impar de curules de representación proporcional colocaran más hombres que mujeres por esta vía.

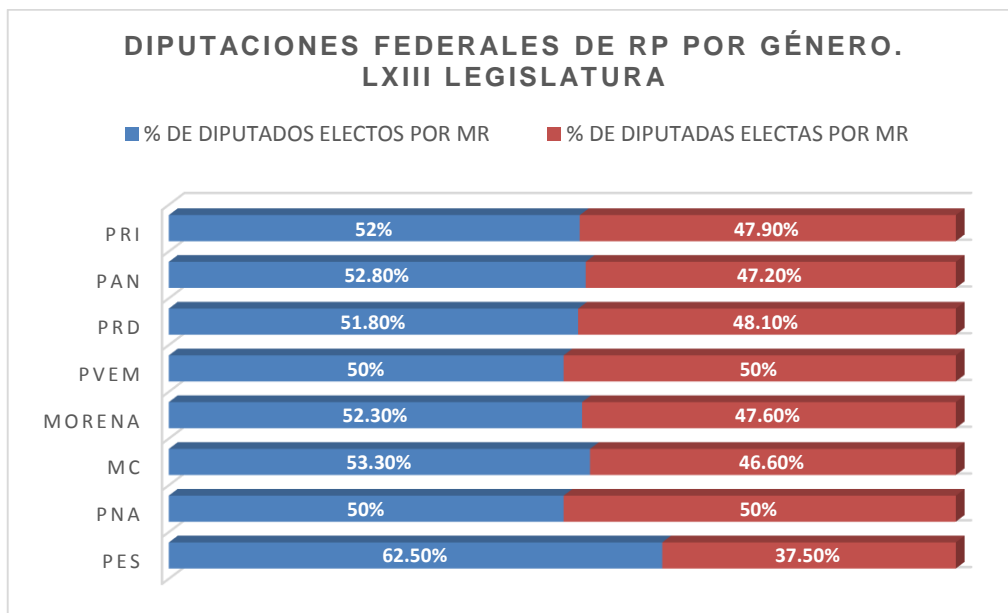


Gráfica: Elaboración Propia con datos de Sirvent, Marian. **La participación de las mujeres en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados: LVII a LXII legislaturas.** Tesis doctoral.

En total lograron un espacio en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 220 mujeres, lo que equivale al 44 por ciento de las diputaciones. De ellas, 125 (57.9%) lo obtuvieron mediante la fórmula de mayoría relativa y 95 (43.1%) por la vía de representación proporcional. Los resultados se acercaron a la proporción que existe entre las fórmulas electorales en el sistema mixto mexicano (60/40%), aunque, si se comparan con ésta, podría afirmarse que las mujeres tuvieron ligeramente menos éxito en la ruta de la mayoría relativa y ligeramente mayor en la de representación proporcional.



Elaboración propia con datos del INE



Elaboración propia con datos del INE

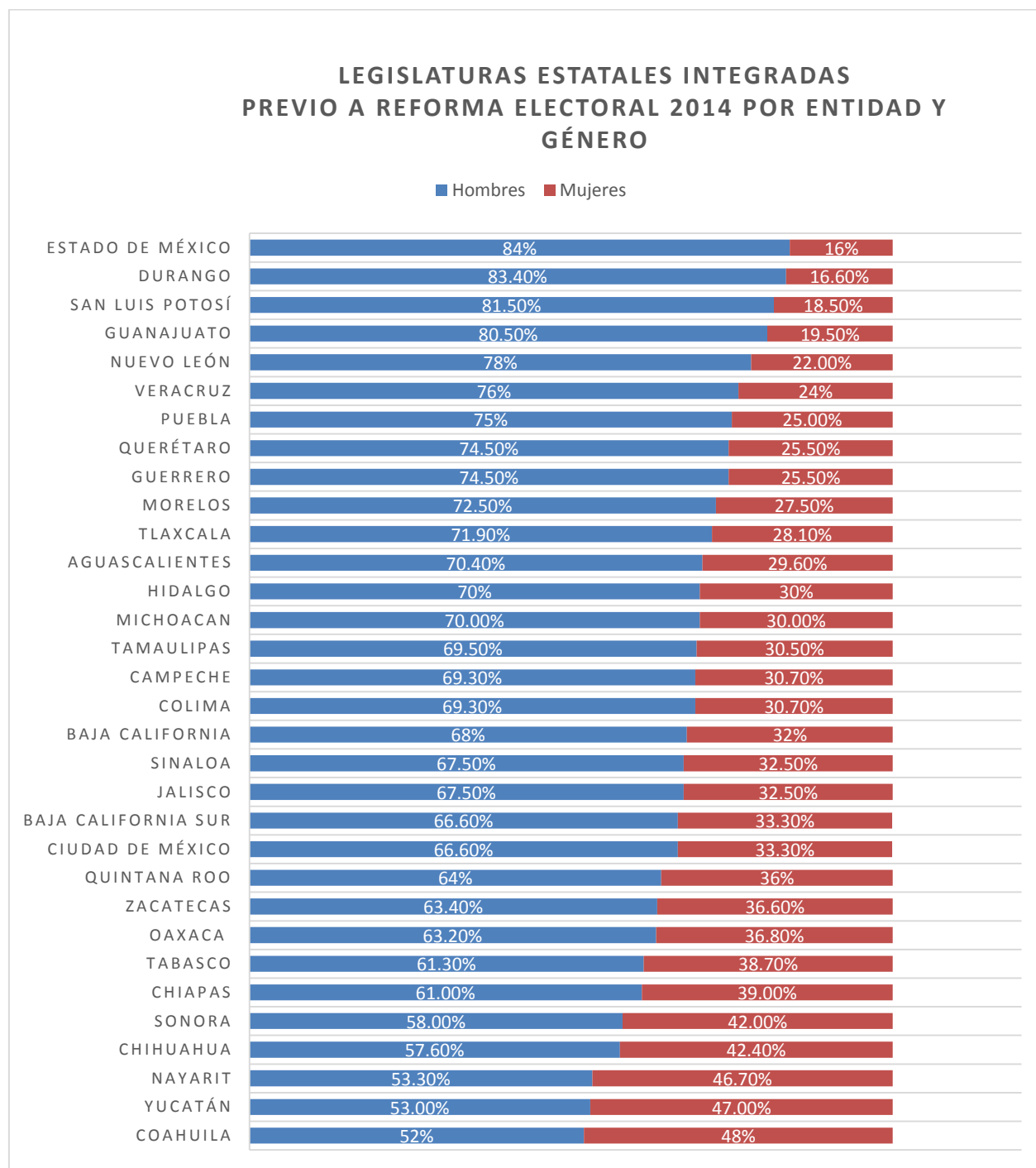
Distribución de género en la integración de los congresos estatales

En cumplimiento con la nueva normatividad en materia de género, elevada a nivel constitucional en 2014 y cuya aplicación de dispuso de alcance nacional, todas las entidades federativas armonizaron sus constituciones y leyes electorales locales con las nuevas disposiciones nacionales, y las autoridades jurisdiccionales fueron contundentes en obligar a los estados (Chipas) y partidos políticos (....) que intentaron pasar por alto la disposición, a aplicarla so riesgo de perder las candidaturas.

El impacto de la reforma, varió de acuerdo con la representación de género y las disposiciones electorales previas previstas en cada entidad, pero en todos los casos el avance fue excepcional.

Como se observa en las gráficas siguientes, en las legislaturas integradas previo a la reforma electoral 2014, encontramos una fuerte variedad de presencia de mujeres en los Congresos estatales. El promedio general de presencia de mujeres en las legislaturas era de 31.46%, pero mientras que en las legislaturas del Estado de México, Durango, San Luis Potosí y Guanajuato su presencia era menor al 20

por ciento; en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Yucatán y Coahuila, rebasaba el 40 por ciento sin llegar a la paridad. Las entidades restantes registraban una presencia de mujeres que iba del 20 al 39 por ciento



Porcentaje promedio de diputadas locales electas previo a reforma electoral 2014: **31.46%**

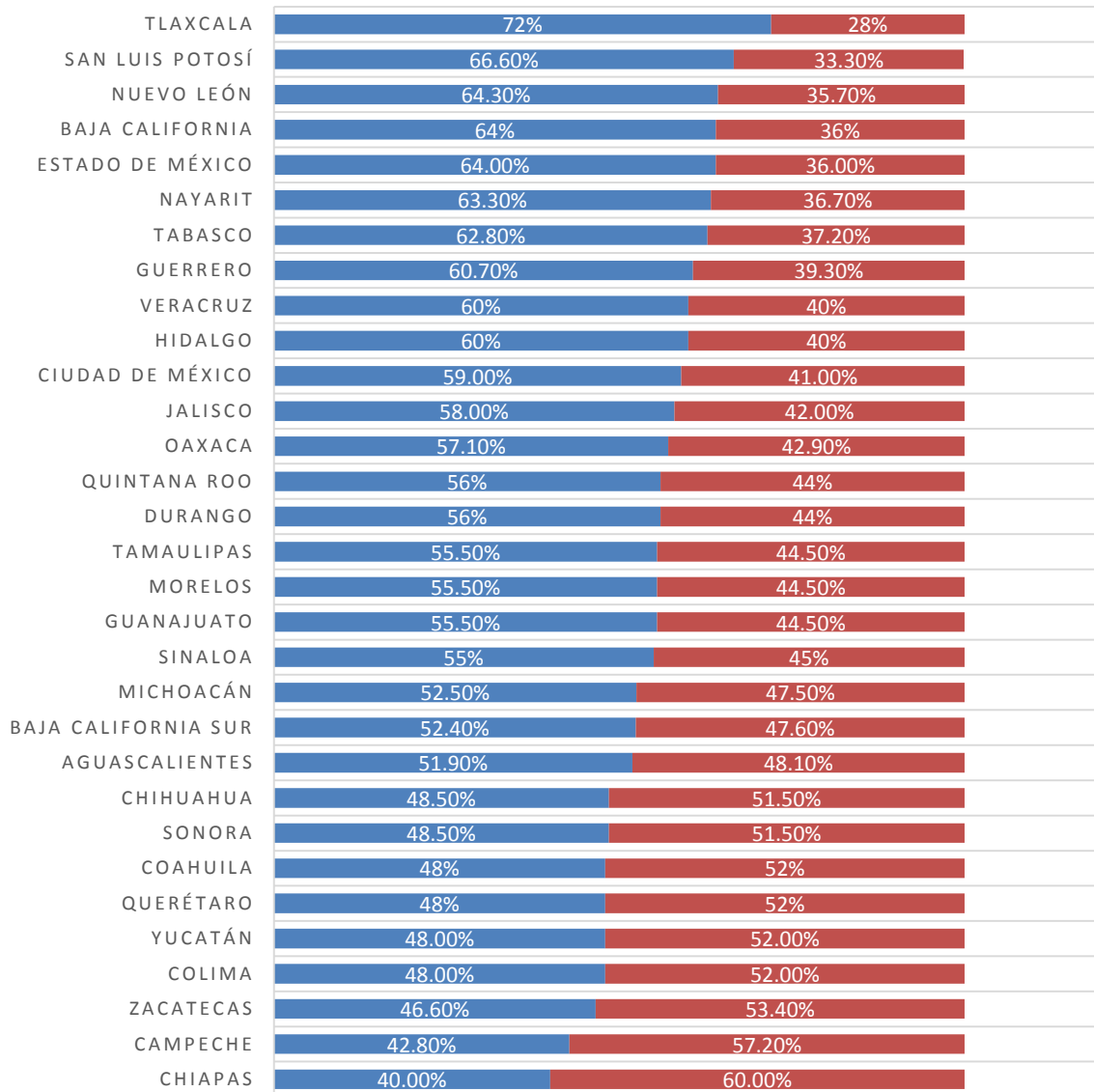
Fuente: Elaboración propia con información del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. [En línea] Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/edos/index.htm>

Una vez aplicadas las disposiciones de género de la reforma político-electoral 2014, la representación de las mujeres se elevó de manera significativamente hasta superar, en algunos casos la paridad en la integración de las legislaturas estatales.

En la siguiente gráfica se observa que la entidad con menor presencia femenina en su legislatura es Tlaxcala, donde las mujeres conquistaron 28 por ciento de los asientos legislativos; tan sólo en San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California, Estado de México, Nayarit, Tabasco y Guerrero, la presencia de mujeres se mantuvo por abajo del 40 por ciento pero arriba del 30 por ciento; en tanto que en nueve entidades: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Querétaro, Yucatán, Coahuila, Zacatecas y Campeche y Chiapas supera el 50 por ciento. Como promedio general, la presencia de mujeres en las legislaturas estatales se ubica en 44.48 por ciento, es decir, aumentó en 13.02 puntos porcentuales.

**LEGISLATURAS ESTATALES ELECTAS TRAS REFORMA ELECTORAL
2014
POR ENTIDAD Y GÉNERO**

■ Hombres ■ Mujeres



Ampliación de la paridad a las candidaturas a gobiernos municipales

La armonización de las constituciones estatales a las disposiciones electorales nacionales de 2014 marcó un nuevo precedente en la búsqueda de la paridad de género en la representación política, al extenderse la acción afirmativa, en todos

los estados, a las candidaturas a los gobiernos municipales. Su aplicación a ese nivel dio pie a nuevos criterios jurisdiccionales que ampliaron a una velocidad sin precedente la presencia de mujeres en los gobiernos municipales, caracterizados por una histórica muy baja presencia de este género.

Mientras que la reforma electoral 2014 exigió a los partidos políticos paridad de género en sus candidaturas a los congresos federal y locales; los estados ampliaron la disposición a las candidaturas a todos los puestos de elección popular en sus jurisdicciones, lo que incluyó a los gobiernos municipales.

Para las elecciones de 2015 se renovaron cinco gobiernos municipales en Baja California Sur, 11 en Campeche, 10 en Colima, 122 en Chiapas, 16 en el Distrito Federal, 46 en Guanajuato, 81 en Guerrero, 125 en Jalisco, 123 en el Estado de México, 113 en Michoacán, 33 en Morelos, 51 en Nuevo León, 18 en Querétaro, 58 en San Luis Potosí, 72 en Sonora, 17 en Tabasco y 106 en Yucatán. En 2016. Aguascalientes renovó 11 ayuntamientos, Baja California cinco, Chihuahua 67, Durango 39, Hidalgo 84, Oaxaca 570, Quintana Roo 10, Sinaloa 18. Tamaulipas 43, Tlaxcala 89 y Zacatecas 58; en tanto que en 2017 Coahuila eligió 38 gobiernos de ayuntamientos, Nayarit 20 y Veracruz 212.

Los gobiernos municipales, en general, se integran por un presidente municipal, electo por mayoría relativa, un síndico, electo por mayoría relativa, y un número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que varía de acuerdo con las disposiciones de cada estado. Para la renovación de éstos, los partidos políticos presentan planillas en las que contemplan todos los cargos.

Con la armonización a los preceptos de la reforma político-electoral 2014, todos los estados exigieron a los partidos políticos garantizar la paridad de género en sus candidaturas a todos los puestos de elección popular, pero para las candidaturas a cargos de representación a nivel municipal, las disposiciones variaron de estado a estado.

Así, si bien en todos los casos se retomó la disposición de que las fórmulas de candidatos (propietario y suplente) deberían integrarse por el mismo género y listas de candidatos de representación proporcional debían integrarse alternando el género de los postulados, los cargos que se consideraron sujetos para aplicar la paridad de género a los gobiernos municipales difirieron: sólo los candidatos a regidores (Morelos), sólo los candidatos a regidores y síndicos (Nuevo León), incluyendo además al candidato a presidente municipal (Querétaro), o contemplando a todas las candidaturas a presidencias municipales (Baja California Sur), aunque hubo estados (Campeche) que no hicieron precisión alguna.

En los estados, la definición de los lineamientos relativos a la aplicación de la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular quedó en manos de los Organismos Públicos Locales, pero con el antecedente de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que promovían una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las contiendas electorales, en varias entidades los lineamientos fueron impugnados y dieron lugar a novedosas tesis jurisprudenciales, que sientan otro precedente en el impulso a una mayor representación política de las mujeres.

Controversias en torno los lineamientos de género en candidaturas municipales

¿Cómo entender la paridad en las candidaturas a los gobiernos municipales, cuando son varias las presidencias de municipios las que se ponen en juego en una entidad federativa en el mismo proceso electoral; cuándo los gobiernos municipales se deciden mediante la competencia de planillas postuladas por los partidos políticos que incluyen candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores, pero los dos primeros se definen por el principio de mayoría relativa y los terceros pueden hacerlo por mayoría relativa y por representación proporcional?

Ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes generales de Instituciones Políticas y Procesos Electorales y de Partidos, como tampoco los reformados códigos estatales electorales precisaron al respecto, por lo cual los lineamientos para aplicar los criterios de paridad quedaron en manos de los Organismos Públicos Locales (Oples).

A nivel municipal, estos lineamientos fueron motivo de impugnaciones por parte mujeres, militantes y partidos políticos en torno, al menos, a los siguientes dos problemas de interpretación:

1. En las planillas a los gobiernos municipales, la alternancia de género debe incluir a los candidatos a presidentes municipales y síndicos o únicamente a los candidatos a regidores (paridad vertical).
2. Al jugarse varias presidencias municipales en un mismo proceso electoral en una entidad, debe aplicarse la paridad de género a esas candidaturas en su conjunto (paridad horizontal) o se les debe considerar de manera separada.

Tesis jurisdiccionales sobre la aplicación vertical y horizontal de la paridad de género

En el proceso electoral 2015, tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaron algunas tesis relativas a la aplicación vertical y horizontal de la paridad de género en las candidaturas a puestos de representación popular.

Para el caso de la aplicación del criterio de paridad de género en sentido vertical, se recuperó la resolución que el 16 de abril de 2013 dictó la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al

resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral: SDF. JRC-3/2013, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra de los criterios emitidos en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la entidad (CG) 18/201. El tribunal resolvió:

Se modifica el Acuerdo CG 18/2013 en materia de equidad de género en la postulación de candidatos a diputados por ambos principios, ayuntamientos y presidentes de comunidad del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:

(...)

Candidaturas para los Ayuntamientos: Se registrarán mediante *planillas completas* con las fórmulas de los candidatos a Presidente municipal, Síndico y Regidores; cada fórmula contendrá los nombres completos de los candidatos propietario y suplentes de un mismo género, que deberán postularse de forma alternada, a efecto de que cada fórmula contenga una candidatura y suplencia de género distinto a la inmediata anterior...Para tomar en cuenta las fórmulas alternadas *se considerará el género del candidato o candidata a Presidente Municipal, que resulte de los sistemas internos que para tal efecto realicen los partidos políticos*. Tratándose de la elección de presidentes municipales y síndicos, los partidos políticos y coaliciones deberán observar la cuota de género paritaria prevista en la legislación del Estado, en la totalidad de sus postulaciones.

En favor de la aplicación del criterio de paridad de género en sentido vertical y horizontal, se replicó resolución de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF que retomó la jurisprudencia 16/2012 de la Sala Superior del TEPJF, en alusión a la aplicación de cuotas de género en una elección de integrantes al Congreso de la Unión, que estipula:

“la paridad significa lograr una igualdad real, no sólo en las condiciones que han de existir para facilitar a las mujeres el acceso a cargos públicos de elección

popular —aspecto del cual se ocupa la equidad— sino en los efectos que esas mismas condiciones buscan alcanzar, a saber, la real y verdadera participación de ambos géneros en el ejercicio del poder mismo, o sea, en la ocupación de los cargos y en el ejercicio de las funciones atinentes, en condiciones efectivamente iguales.”

La resolución de la sala señaló:

Los partidos políticos deberán de garantizar la paridad de género además, en cuanto al número de Presidencias Municipales que postulará cada instituto político, procurando en todo momento sea del cincuenta por ciento de cada género o lo más aproximado, dado el número impar de municipios del Estado.

En el proceso electoral 2015, Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Sonora y Tabasco, fueron obligados por sendas sentencias judiciales a aplicar los criterios vertical y horizontal en sus candidaturas a gobiernos municipales; en tanto que el Estado de México y Nuevo León recibieron dictámenes similares sin que se les obligara a acatarlos para evitar afectar la “certeza” ante el avance en que se encontraba el proceso electoral a momento de las respectivas resoluciones. Un mes más tarde se dispuso una resolución similar en Chiapas, con la salvedad de que en esta entidad sí se obligó a los partidos políticos a cumplir con la paridad, a unos días de la jornada electoral.

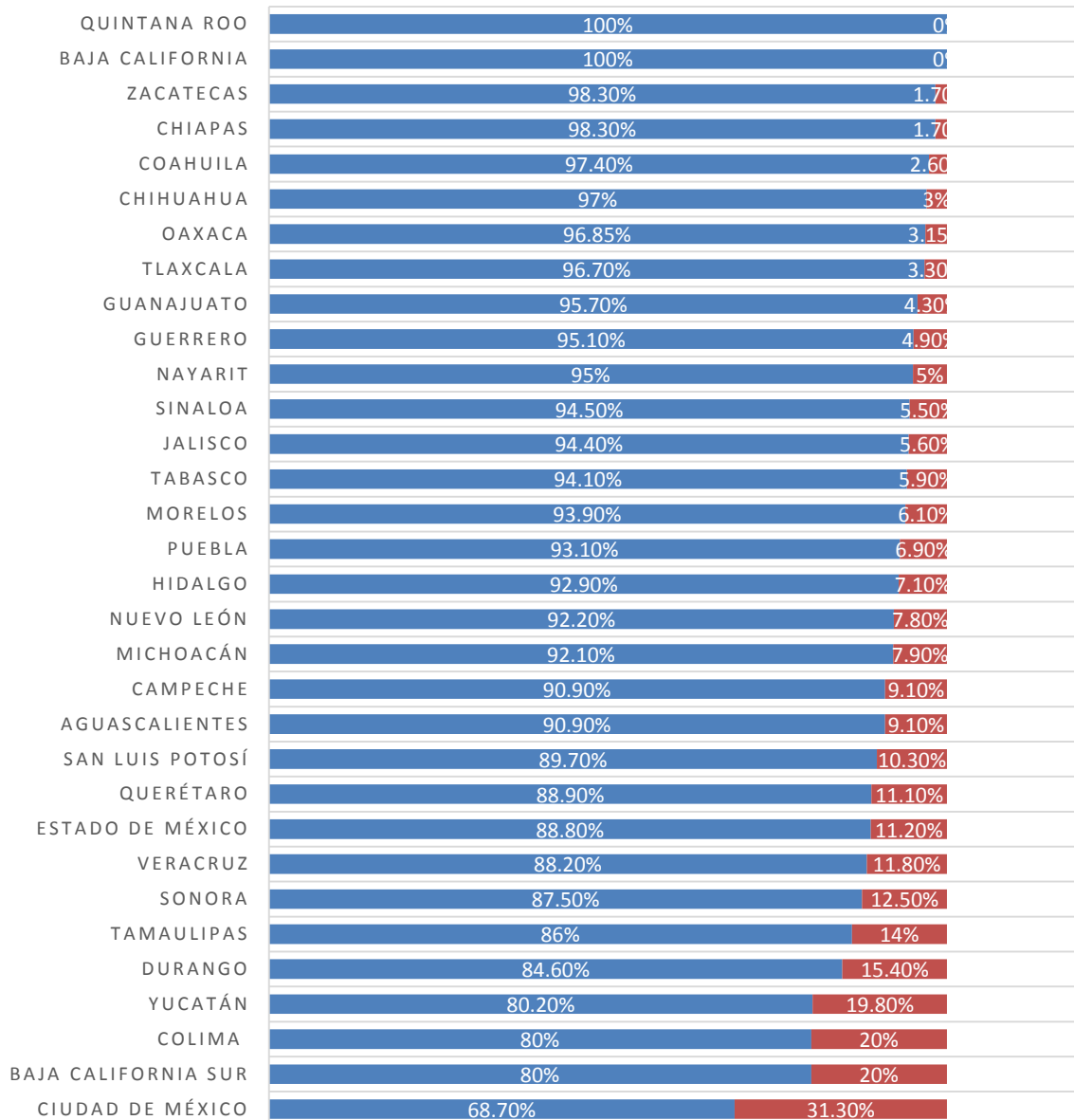
La ausencia de una correcta interpretación de la paridad vertical en los lineamientos relativos a los criterios para aplicar la normatividad en materia de género fue motivo de impugnación en Guanajuato, pero los partidos políticos no fueron obligarlos a aplicarla, dado avance del proceso electoral al momento en que la Sala Superior resolvió el recurso de Rectificación SUP_REC 224/2015.

En su aplicación, la disposición permitió un importante avance en la representación política de las mujeres en los cargos municipales renovados en 2015, 2016 y 2017.

En la siguiente gráfica se observa que antes de la aplicación de la reforma político electoral 2014, el porcentaje promedio de alcaldesas en los estados era de 8.68%. Tan sólo en San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Durango, Yucatán, Colima y Baja California Sur las alcaldesas encabezan entre 10 y el 20 por ciento de los ayuntamientos en sus entidades.

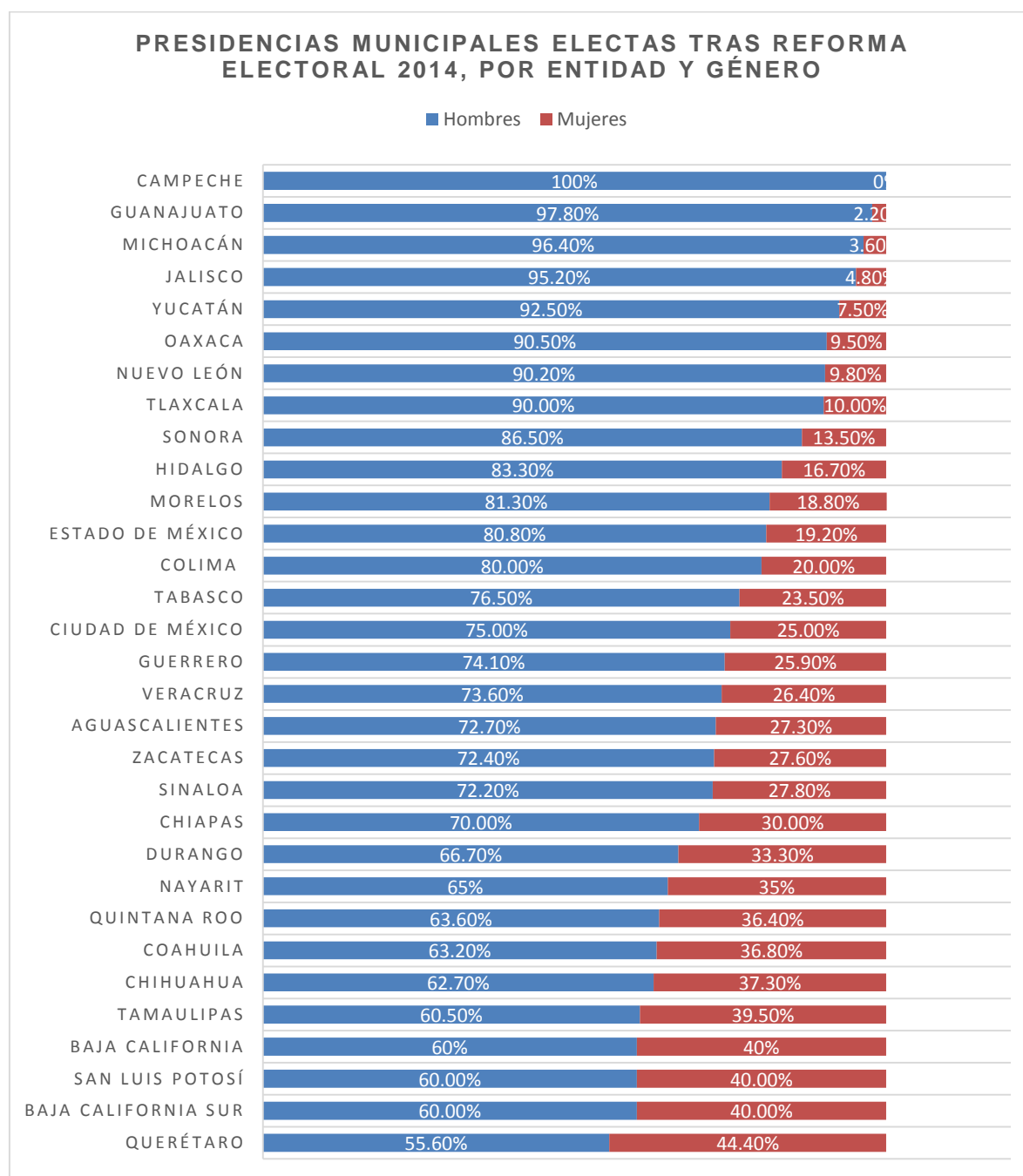
**PRESIDENCIAS MUNICIPALES INTEGRADAS PREVIO A REFORMA
ELECTORAL 2014
POR ENTIDAD Y GÉNERO**

■ Hombres ■ Mujeres



La aplicación de las disposiciones electorales aprobadas en 2014, elevó el porcentaje promedio de mujeres alcaidesas en el país a 23.6% , lo que representó un avance de 15 puntos porcentuales. No obstante, en Campeche todos los presidentes municipales electos fueron varones, y en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Nuevo León y Tlaxcala la proporción de presidencias municipales ganadas por mujeres llegó a lo sumo a 10 por ciento; en tanto que en

Durango, Nayarit, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, San Luis Potosí, Baja California Sur y Querétaro ocuparon entre el 30 y el 44.40 por ciento de las presidencias municipales.



Violencia política contra las mujeres

La reforma político-electoral 2014 tuvo, no obstante, también efectos negativos. La obligatoriedad nacional de la paridad de género en las candidaturas a los legislativos y a las presidencias municipales hizo “más abierto y violento” un fenómeno que venía manifestándose desde la puesta en marcha de la acción afirmativa en favor de las mujeres en México: el fenómeno de la violencia política contra las mujeres.

Aspirantes a candidatas, candidatas y servidoras públicas electas y en funciones comenzaron a denunciar la violencia de que eran objeto.

En ausencia de un delito con esa tipificación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Persona elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, con el objeto de identificar la violencia política contra las mujeres, informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncias, quejas, querellas y demandas, evitar daños mayores a las víctimas y generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a los casos.

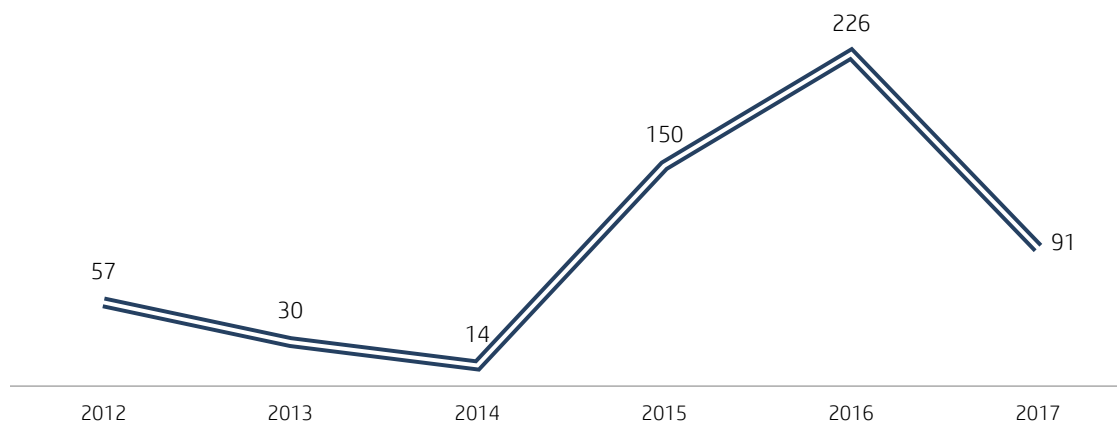
El Protocolo conceptualiza la violencia política contra las mujeres como “todas aquellas acciones u omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Este tipo de violencia se puede dar en el ámbito público o privado, puede ser psicológica, física, patrimonial, económica, sexual; puede ser perpetuada por el

Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de partidos, medios de comunicación, y puede cometerla una persona o un grupo de personas.

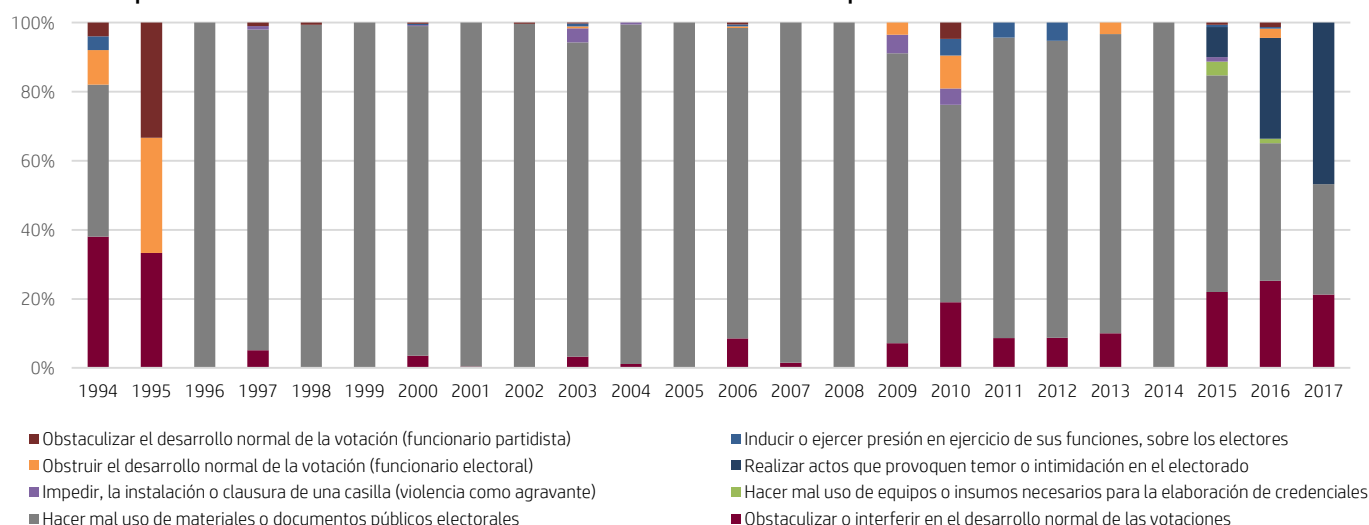
El protocolo considera casos de violencia política a: Los registros simultáneos de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones; el registro de mujeres candidatas exclusivamente en los distritos perdedores, amenazas a mujeres electas; inequidad en la distribución de tiempos en radio y televisión, inequidad en la distribución de recursos para las campañas, uso inadecuado del presupuesto destinado a los partidos político para la capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos. Es decir, varios de los casos que se presentaron desde los primeros años de aplicación de la política de acción afirmativa, y que fueron contrarrestados con sentencias del TEPJF y la misma reforma político electoral 2014.

En enero de 2016, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales publicó el “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances (2013-2016), y este año realizó una segunda versión en la cual el diagnóstico y los avances abarcan hasta 2017.

En su más reciente reporte, la Fepade da a conocer que de 2012 a junio de 2017 se han iniciado 571 expedientes por casos que podrían constituir violencia política en general, **el 39.6% de los casos se presentó en 2016.**



El informe observa que hasta 2014 los casos con mayor presencia eran los relacionados con el mal uso de materiales o documentos electorales. Sin embargo, a partir de 2015 hasta junio de 2017, los delitos por obstaculizar en el desarrollo normal de las votaciones y por actos de temor o intimidación representan el 49.6% del total de actos de violencia política.



*Nota: Las cifras pueden variar con lo anteriormente reportado, debido a la reclasificación de los expedientes por parte de los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF).

** Las cifras de 2017 comprenden del 1 de enero al 03 de julio.

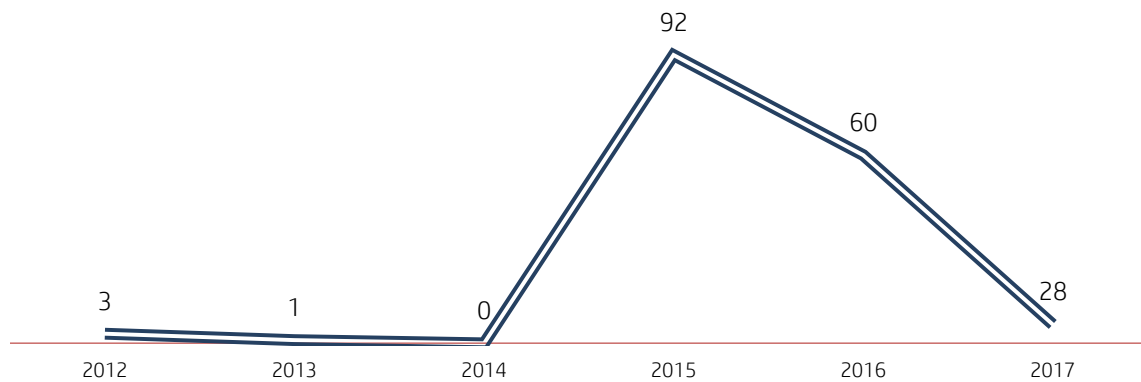
La Fiscalía incluye en estos casos aquellos donde:

- Se obstaculice el desarrollo normal de la votación
- Inducir o ejercer presión en el ejercicio de sus funciones sobre los electores.
- Obstruir el desarrollo normal de la votación
- Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado,
- Impedir la instalación o clausura de una casilla
- Hacer mal uso de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales
- Hacer mal uso de materiales o documentos públicos electorales

h) Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones

En ausencia de un tipo penal definido como violencia política de género, la fiscalía seleccionó los casos en los que la víctima es mujer y los definió como violencia política de género, particularmente por la violación al artículo 7, fracción IV y XVI de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Entre 2012 y hasta el 28 de junio de 2017, señala en el informe, se han detectado 184 casos de violencia política contra las mujeres:



“La FEPADE ha consignado seis averiguaciones previas relacionadas con violencia política contra las mujeres, de éstas, se han librado cuatro órdenes de aprehensión que han permitido el inicio de procesos penales. En el nuevo sistema de justicia penal tras solicitarse audiencia inicial en una carpeta de investigación, el juez se declaró incompetente y se remitió al fuero común, dos casos más se encuentran en proceso de judicialización, y se tiene protección y labor de acompañamiento.

De igual manera se han reconocido a 37 víctimas, se han solicitado 28 solicitudes de protección; se ha dado seguimiento a las 8 víctimas que cuentan con protección estatal y se han realizado 5 acompañamientos ministeriales a sesiones públicas en el ejercicio de los cargos de las víctimas de Violencia Política de Género.” (Fepade 2017, Pág. 7)

Asimismo, informó que del 1° de enero de 2012 al 28 de febrero de 2017, registró **577** averiguaciones previas iniciadas por denuncias de mujeres.

Año	Averiguaciones previas
2012	192
2013	67
2014	55
2015	202
2016	52
Del 01 de enero al 19 de junio de 2017	11
Total	579¹

Del total de averiguaciones previas iniciadas por denuncias de mujeres, se han determinado **257** averiguaciones previas, distribuyéndose de la siguiente forma:

Determinación	Averiguación Previa	%
Acumulada	32	12.5%
EAP	69	26.8%
Incompetencia	40	15.6%
NEAP	106	41.2%
Reserva	10	3.9%
Total	257	100%

¹ Cambios derivados de las actualizaciones generadas durante las indagatorias.

“Desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la protección de la víctima se ha convertido en una línea prioritaria en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; en especial la protección de los grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como edad, preferencia, orientación sexual y género, como son las mujeres.

ESTADO	CARPETA DE INVESTIGACION
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	1
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CDMX	12
CHIAPAS	7
CHIHUAHUA	1
COAHUILA	7
DURANGO	4
EDO MEX	2
GUERRERO	4
HIDALGO	3
JALISCO	1
MORELOS	3
NAYARIT	2
OAXACA	8
PUEBLA	6
QUINTANA ROO	3
SAN LUIS POTOSI	1
TABASCO	5
TEPIC	1
TLAXCALA	14
VERACRUZ	2
YUCATAN	1
ZACATECAS	1
Total general	91

La Ciudad de México, Oaxaca y Tlaxcala, son los que tienen mayor número de casos denunciados de manera formal y a través de redes sociales, en los que las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Se tiene registro que, dentro de los **91** casos de denuncias de violencia política de género, **16** de ellos son hechos que lesionan directamente los derechos político electorales de mujeres indígenas.

Indica que no todos los casos son en contra de las mujeres, existen casos de violencia que son directamente en contra de los derechos político electorales de la comunidad LGBTTTI.

Violencia que afecta derechos de la comunidad LGBTTTI
3

De los casos denunciados específicamente conforme a los derechos político electorales de las mujeres, se tiene que **es en el ejercicio de las funciones de cargos públicos, a los que fueron electas las mujeres, donde existe un mayor número de denuncias por violencia política de género, teniendo casos públicos como el de Chenalhó, Oxchuc en Chiapas y Mártir de Culiapan en Guerrero.**

Funcionarias electorales	Mujeres en el ejercicio de un cargo público	Candidatas en proceso electoral
18	42	22

Del global de los casos de violencia política de género, se ha otorgado la calidad de víctimas directas a **37** mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encuentran, principalmente por el contexto político en el que se desarrollan los elementos de discriminación, amenazas e intimidación en contra de su situación como mujeres, solicitándose la protección por parte de la policía federal para el resguardo de su integridad física. Asimismo, se han solicitado medidas de protección para **37** de las víctimas directas, se ha brindado acompañamiento por personal de la policía federal ministerial y agentes del ministerio público de la FEPADE casos de extrema urgencia para prevenir la continuidad de violencia política de género; finalmente policía federal de la Comisión Nacional de Seguridad ha realizado la valoración de riesgo, en cumplimiento a las órdenes ministeriales dictadas para **6** de los casos de mayor gravedad y ha brindado el acompañamiento en sesiones de cabildo, para mitigar la violencia política de género”. (Fepade 2017 PP. 21-23)

En los siguientes dos apartados se buscará cruzar la localización geográfica de los casos con las entidades que registraron un mayor avance en la representación política de las mujeres y su relación con el nivel de competitividad por entidad.

Hasta aquí el avance

Fuentes de información:

- **Bibliográficas:**

Aparicio Castillo, Francisco Javier (2011), *Cuotas de Género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009*, México, TEPJF, Temas Selectos de Derecho Electoral, no. 18.

Aparicio Castillo, Francisco Javier y Langston Joyn (2012), "Beyond incumbency disadvantage: why more women do not win legislative seats?", *Comparative Politics*, The University of Chicago.

Aparicio Castillo, Francisco Javier (2013), *Género, elecciones locales y Congreso*, México, junio 10, <http://javieraparicio.net/2013/06/10/cuota-generocongreso/>

Carbonell Miguel, *La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cuotas electorales de género*: www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/8/cl/cl8.htm.

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2010) *La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad*. México, LXI Legislatura, Cámara de Diputados.

file:///C:/Users/Adriana%20Baez%20Carlos/Downloads/2010%2002%20Libro_Part_Pol.pdf

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2015) *La reforma hacia la paridad: Cerrando la brecha y promoviendo el liderazgo político de las mujeres*, México, LXII Legislatura, Cámara de Diputados. file:///C:/Users/Adriana%20Baez%20Carlos/Downloads/2014%2008%20Dossier_LPM.pdf

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2015), *El derecho humano de las mujeres a la participación política*, LXII Legislatura, Cámara de Diputados

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2015), *Participación Política de las Mujeres 2014*, México, LXII Legislatura, Cámara de Diputados.

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2015), *Presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno*, México, LXII Legislatura, Cámara de Diputados.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) (2014) *Percepción laboral y económica de las mujeres*. México, LXII Legislatura, Cámara de Diputados
<http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Percepcion-laboral-y-economica-de-las-mujeres.-Marzo-de-2014>

Comisión Económica para América Latina (2007), *Hacia un horizonte paritario en América Latina*, Décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y El Caribe, Quito, Agosto.

Dahlerup, Drude(1993), “De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la masa crítica aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava”, México, *Debate feminista*, año 4, vol. 8.

Fepade, Informe de la Fepade sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2013-2016.

Fepade, Informe de la Fepade sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2013-2017.

Fernández Poncela, Anna María (2003), “Radiografía de la élite política mexicana: datos sociodemográficos y percepciones según sexo”, México, *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, número 2, SOMEE, julio-diciembre, pp. 59-96.

Fernández Poncela, Anna María (2003), “Radiografía de la élite política mexicana: datos sociodemográficos y percepciones según sexo”, México, *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, número 2, SOMEE, julio-diciembre, pp. 59-96.

Guzmán, Virginia y Claudia Moreno (2007), “Hacia un horizonte paritario en América Latina: representación política de las mujeres”, Quito, Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Huesca, Alejandra Sofía (2013), “La situación de la mujer en el espacio público. Un reto más para la democracia mexicana”, México, FCPyS, UNAM, Tesis de Licenciatura

Guzmán, Virginia y Claudia Moreno (2007), “Hacia un horizonte paritario en América Latina: representación política de las mujeres”, Quito, Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Huesca, Alejandra Sofía (2013), “La situación de la mujer en el espacio público. Un reto más para la democracia mexicana”, México, FCPyS, UNAM, Tesis de Licenciatura.

Instituto Nacional Electoral (2015) *Informe sobre el cumplimiento de la paridad de género a que están obligados los partidos políticos en el registro de candidaturas a diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y representación*

proporcional. Proceso electoral 2014-2105, México, Instituto Nacional Electoral. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Instituto Nacional Electoral (2015). "Acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a diputadas y diputados al congreso de la unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el proceso electoral federal 2014-2015" INE/cg162/2015

Langston, Joy y Aparicio Francisco Javier (2011), *Genderquotas are not enough: how background experience and campaigning affect electoral outcomes*, Paper 234, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Miguélez, Mariana (2014) *Las determinantes de la participación electoral subnacional en México (1991- 2012)*, México, **Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública** Vol.7 Núm.13, enero-junio.

Observatorio Comicios Electorales 2015. *Estatutos partidarios y género, Las mujeres mexicanas rumbo a la paridad.* México, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, LXII Legislatura, Cámara de Diputados.

Observatorio Comicios Electorales 2015 *Marco Jurídico. Instrumentos Internacionales y Nacionales*, México, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, LXII Legislatura, Cámara de Diputados.

Peña Molina, Blanca Olivia (2003), "La cuota de género en la legislación electoral mexicana: ¿igualdad de oportunidades o igualdad de resultados?", *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, núm. 2, México, SOMEE, julio-diciembre, pp. 35-58

Peschard, Jacqueline (2003) "Medio siglo de participación política de la mujer en México", *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, núm. 2, México, SOMEE, julio-diciembre, pp.13-34.

Reynoso, Diego y D'Angelo Natalia (2006) "Las leyes de cuota y su impacto en la elección de mujeres en México", México, *Política y Gobierno*, vol XIII, Núm. 2, segundo semestre.

Ríos Tobar, Marcela (2008), "Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina", Chile, FLACSO e IDEA Internacional.

Segob, TEPJF, INE, Fepade, CEAV, Inmujeres, “Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres”, México 2016.

Torhton Miguel Angel (2013) “La brecha de género en las elecciones presidenciales de México”, México, *Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública* Vol.6 Núm.12, julio-diciembre.

- **Criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas federales:**

Partido Acción Nacional, Criterios a utilizar para el cumplimiento de acciones afirmativas para la paridad de género en las candidaturas, de conformidad con el numeral 3 del artículo 81 de los Estatutos Generales del Partido

Partido Revolucionario Institucional, Método de elección de los candidatos y candidatas a diputados y diputadas federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Partido de la Revolución Democrática, “Resolutivo del Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional relativo a la Convocatoria para elegir a los candidatos y candidatas a diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para el proceso electoral federal 2014-2015”, y en cuya basesexta, numeral 4, fueron determinados los “criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas”.

Partido del Trabajo “Calendario para el proceso interno de selección de candidatos del Partido del Trabajo, en el marco del proceso electoral federal 2014-2015”.

Partido Verde Ecologista de México Acuerdo CNPI-16/2014

Movimiento Ciudadano “Procedimiento aplicable para la selección y elección de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 226, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales y en el Acuerdo INE/CG209/2014, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”

Partido Nueva Alianza, “Acuerdo del Comité de Dirección Nacional por el que se aprueban los Criterios que emite el Partido Nueva Alianza, para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados y diputadas federales y locales, que serán postulados en los procesos electoral federal y concurrentes 2014-2015”.

Morena, Acuerdo sobre la definición del método de elección, criterios de género, fecha de inicio del proceso, órganos responsables y fechas de la jornada electoral para la elección de candidatos a diputados federales en el proceso electoral federal 2014-2015.

Partido Humanista, Criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas.

Partido Encuentro Social, Método de selección de candidatos a puestos de elección federal para el Proceso Electoral 2014-2015.

- **Legislaciones:**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Instituciones y Procesos Electorales

Ley General de Partidos

Estatales.-

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. Capitulo III. De la elección de gobernador, diputados y ayuntamiento [en línea], Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Dirección URL: <http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/4/119/>